

Respuestas violentas y abuso de poder

# FAES: terrorismo de Estado contra los más pobres

Provea\*

EL SIGLO

Presentamos ante el lector dos trabajos: el primero, muestra el protagonismo que han tenido las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) en Venezuela desde su creación, llevando como bandera la muerte y siendo responsables de masacres públicas, generalmente en los sectores más pobres. Solamente entre enero y diciembre de 2018, asesinaron al menos 205 venezolanos, según reportes de Provea. El segundo trabajo corresponde a un artículo argumentativo de la falsa división entre un Papa de izquierda y unos obispos de derecha, por la cual el oficialismo venezolano ha buscado debilitar la credibilidad de la Iglesia; sabiendo que, para la misma, la fe no es ideológica ni doctrinaria. Su único interés es la atención pastoral a las personas, traducida en la promoción del bienestar para con los más pobres y sufridos de una sociedad, como lo es hoy la venezolana



RAYNER PEÑA / EL PITAZO

El 15 de enero de 2018 los venezolanos conocieron el significado de las siglas FAES. Ese día un operativo policial-militar realizado en la carretera Mamera –El Junquito–, al oeste de Caracas, acabó con la vida del piloto Oscar Pérez y sus seis acompañantes, quienes huían de las autoridades luego de realizar varias operaciones y pronunciamientos contra el gobierno de Nicolás Maduro. Rodeados por cientos de policías y militares, los rebeldes manifestaron públicamente por redes sociales su intención de entregarse a las autoridades y el temor ante el inminente riesgo a sus vidas e integridad. En el procedimiento, las autoridades no agotaron la vía de la resolución pacífica y horas después de iniciada la “Operación Gedeón”, el exministro de Interior, Justicia y Paz, Néstor Reverol, informaba la muerte de Pérez, sus acompañantes, y un funcionario policial que participaba en el operativo, que presuntamente había sido asesinado por los alzados. Tanquetas, lanza-cohetes y un enorme poder de fuego empleado por los agentes de la fuerza pública, propiciaron el desenlace violento de los hechos y la muerte de ocho venezolanos.

A la cabeza del operativo se encontraba un cuerpo élite de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) con apenas seis meses de fundado. Luego de un excesivo despliegue en el uso de la fuerza, las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) asesinaron a Pérez y a seis personas más, que para Tamara Taraciuk, investigadora de Human Rights Watch, auguraba “un pésimo 2018 para los derechos humanos en Venezuela”. Como se corroboraría doce meses después, su pronóstico había

sido acertado. La profundización de la crisis económica transformó el año en doce meses de protestas intensas, en una cantidad mayor que para el 2017, por demandas sociales. La respuesta del Gobierno fue implacable: catorce personas asesinadas en el contexto de manifestaciones, mientras 205 perdían la vida en supuestos operativos de seguridad ciudadana. En todos los casos, el FAES destacaba por su protagonismo.

#### FUERZAS DE ACCIONES PARA LA MUERTE

Las FAES fueron presentadas por primera vez por Nicolás Maduro el 14 de julio de 2017. Durante su alocución afirmó que la agrupación de élite había sido creada para combatir el “crimen organizado y el terrorismo”. La creación de este componente de la PNB es atribuida al exministro Reverol, pero fue Alexis Escalona Marrero, exviceministro de Seguridad Ciudadana quien hizo la presentación pública y explicó detalladamente la composición y funciones del brazo táctico de la Policía Nacional Bolivariana.

Durante el acto fueron exhibidos 35 vehículos, 180 motos y unidades antimotines (Vene-4, Jacks, ballenas y barreras) que fueron adjudicadas a las FAES, a pesar de no tener competencias legales para la gestión de manifestaciones. Maduro, en un claro aliento para que la fuerza élite situara entre sus objetivos a las expresiones de disenso y descontento hacia su gestión, afirmó:

Tienen el entrenamiento para defender y proteger al pueblo frente al crimen y frente a las bandas terroristas alentadas por la derecha criminal y terrorista que ha pretendido durante más de cien días hacer de nuestro país un escenario de guerra para justificar la intervención imperialista extranjera. No han podido ni podrán. En Venezuela vencerá la paz, vencerá el pueblo unido. Activada las Fuerzas de Acciones Especiales.

Un grupo de ochenta agentes inició la primera fase de conformación y adiestramiento de las FAES, meses antes de su presentación pública. Para julio de 2017, la plantilla había aumentado a 641 agentes concentrados en Distrito Capital, Miranda y Aragua. Un año después, en julio de 2018, las FAES contaban con 1.290 agentes que integraban seis divisiones: Antidrogas,

*Toman los barrios e ingresan a las casas encapuchados con armas largas. A veces, las víctimas son asesinadas en sus hogares, en otras, en alguna vía pública o se las llevan en sus carros y aparecen muertas en los hospitales.*

Contra la Delincuencia Organizada, Respuesta Inmediata, Contra Delitos Económicos, Casos Especiales y Brigada Canina. Para esa misma fecha, se anunciaba la expansión del componente a los estados Guárico, Lara, Táchira y Zulia.

Según el criminólogo e investigador de Provea, Keymer Ávila, aunque el FAES pertenece a la Policía Nacional Bolivariana (PNB) no tiene entre sus funciones el control de manifestaciones, pues para ello la PNB cuenta con otra división especializada en orden público, que demanda un entrenamiento específico y que posee armamento no letal para la contención de este tipo de situaciones. Por tanto, la actuación del FAES, con una lógica de abordaje de alta letalidad, no puede tener otro resultado que una gran cantidad de violaciones al derecho a la vida. Según cálculos de Ávila el FAES, junto a la Guardia Nacional Bolivariana, estaría involucrada en al menos el 36 % de las muertes motivadas por la conflictividad política.

Para el especialista en el derecho a la integridad, los modos de operación del FAES son, esencialmente, propios de las Fuerzas Armadas: “Toman militarmente una zona concreta, como si fuesen un ejército de ocupación y generalmente ‘cazan’ a sus objetivos”. Alejados de la lógica de seguridad ciudadana –afirma en un texto para el portal *Efecto Cocuyo*–, en donde se debe prevenir o detener en el marco de la legalidad a un presunto delincuente, lo que se privilegia es el razonamiento de “dar de baja” a enemigos. Además, los funcionarios actúan con el rostro cubierto con capuchas, sin identificación personal visible, y portando armas largas.

#### ROSTROS DEL DOLOR

Ante la tolerancia del Ministerio Público Constituyente y las omisiones de la Defensoría del Pueblo Constituyente, han sido los medios de comunicación quienes han recopilado los testimonios de las múltiples víctimas del FAES. El portal *Crónica.Uno* sistematizó 42 casos en donde se repetía un patrón: múltiples efectivos se aparecen en los hogares sin órdenes de captura o allanamiento. Toman los barrios e ingresan a las casas encapuchados con armas largas. A veces, las víctimas son asesinadas en sus hogares, en otras, en alguna vía pública o se las llevan en sus carros y aparecen muertas en los hospitales. La periodista

Claudia Smolansky relató como, en la mayoría de los casos, son los propios victimarios los que hacen el traslado del cadáver al centro hospitalario más cercano: “Envuelven a las víctimas en sábanas blancas. Algunas veces, de acuerdo con familiares, los torturan antes de matarlos y a los deudos les cuesta reconocer el cuerpo debido a los maltratos y las golpizas”. El reporte que llega al Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC), elaborado por el propio FAES, asegura que el fallecimiento fue consecuencia de un “enfrentamiento”. Diferentes denuncias presentadas a Provea aseguran que los familiares de las víctimas son amenazados, en la puerta de la morgue, para permitir la imposición de esta versión de los hechos. En algunos casos, las amenazas implican “retrasar”, o incluso “desaparecer” el cuerpo de la víctima. También, los testimonios aseguran que el FAES habría actuado en complicidad con organizaciones paramilitares, civiles armados afines al oficialismo, lo cual asegura que luego del operativo el miedo y el terror queden firmemente instalados en el barrio.

*Cronica.Uno* relató la historia de Cristian Charris, quien trabajaba en una peluquería en La Dolorita, Petare. Por una macabra broma del destino, el día de su cumpleaños número 24 sería asesinado por funcionarios del FAES. Hijo único, su madre Carmen Arroyo relató cómo el fiscal designado para el caso de Cristian no ha hecho ninguna actuación: desde el día de los hechos y, por lo menos hasta el mes de marzo, se encuentra de vacaciones. La versión oficial asegura que el adolescente poseía dos investigaciones abiertas por los delitos de homicidio y robo:

¿Cómo es eso que él era buscado por homicidio desde el 2016 y nunca le enviaron una citación? A Cristian no era difícil encontrarlo. O estaba en la barbería o en la cancha, o si no, en su casa. Además, ni siquiera me dicen cómo se llama esta persona que presuntamente está muerta. Tampoco han aparecido sus familiares.

En el amanecer de lo que creía sería un día festivo, el padre de tres hijos subía por las escaleras del sector La Lira cuando efectivos del FAES, escondidos tras un muro de ladrillos y zinc le dispararon. Su jefe no ha abierto las puer-

*Vayan desde ya a obtener victorias [...] en Venezuela el terrorismo tiene nombre y apellido, son estos grupos parásitos, vende patria de la derecha [...] que se han aliado con las bandas criminales de asesinos y secuestradores y poniéndole mucha plata y droga han puesto a estas bandas como instrumentos de la violencia, primero delincuencial, pero también de la violencia terrorista.*

tas del negocio desde que murió Cristian. “No hay los ánimos. Ni míos, ni de los clientes. Todos sabemos lo que ocurrió. Y lo aterrador es que hoy sufre Carmen, mañana puedo ser yo o cualquier otra mamá”.

### **MASACRE A CUENTAGOTAS**

De acuerdo a los registros levantados por Provea, las Fuerzas de Acciones Especiales de la PNB fueron responsables del asesinato de al menos 205 venezolanos entre los meses de enero y diciembre de 2018. Las FAES iniciaron el período con una masacre pública difundida por las redes sociales. En adelante, numerosos operativos que involucraron a la agrupación dejaron decenas de asesinados y mostraron su desapego a los estándares que regulan los principios sobre uso progresivo y diferenciado de la fuerza, y la recurrente práctica de ejecuciones extrajudiciales presentadas ante la opinión pública como “muertes por enfrentamiento”.

Entre cinco y nueve personas asesinadas por operativo es el promedio que arrojan las actuaciones de las FAES en las comunidades populares donde actúa. Provea logró individualizar a estas 205 personas asesinadas durante 2018, quienes en su mayoría eran hombres (97,56 %), cuyas edades oscilaban entre los 12 y los 49 años. A excepción de las masacres ocurridas en El Junquito (15.01.2018); Fuerte Tiuna (08.09.2018) y Torre Viasa (12.11.2018); la mayoría de las masacres de las FAES, registradas por Provea, se produjeron en barrios y zonas empobrecidas de Caracas y otras ciudades del país, revelando que las principales víctimas de este escuadrón de la muerte son hombres jóvenes y pobres.

Los asesinatos registrados por Provea se produjeron en los estados Lara (72); Distrito Capital (64); Zulia (25) Guárico (22); Miranda (8) Aragua (7); Carabobo (3); Táchira (2); Vargas (1); Yaracuy (1). Provea admite que sus registros probablemente no revelen la totalidad de los casos ocurridos. Debido a factores como la opacidad oficial, las dificultades para el monitoreo –derivadas de la disminución de prensa independiente–, y el temor de los familiares de las víctimas para denunciar los abusos, la data pudiera estar sujeta a un subregistro, lo que indica que pudo haber ocurrido un número aún mayor de asesinatos a manos de las FAES en el período analizado. En

días recientes la Red de Derechos Humanos del estado Lara denunció que entre los meses de agosto de 2018 y enero de 2019, ese componente habría asesinado a más de cien jóvenes en zonas populares de la entidad, en situaciones presentadas como “muertes por enfrentamiento” o “resistencia a la autoridad”.

En Lara, la entidad más golpeada por la actuación de las FAES, destaca la comunidad de Las Sábilas como la zona con el mayor número de muertes. En una masacre por goteo realizada por el grupo entre el 8 y el 11 de septiembre de 2018, doce hombres con edades comprendidas entre los 18 y 49 años fueron asesinados en supuestos enfrentamientos en los que ningún funcionario policial resultó herido. En Distrito Capital, la segunda entidad más afectada por la letalidad del componente, figuran El Valle; 23 de Enero y la Torre Viasa en Bellas Artes, con los mayores registros de muertes a manos del escuadrón.

Septiembre (46 casos); octubre (20 casos) y noviembre (51 casos), concentran el mayor número de muertes registradas en el período. La ampliación de las FAES, en número de efectivos y en ámbito de actuación geográfica, supuso un incremento en su letalidad a partir del mes de julio, con un acentuado aumento entre septiembre y noviembre de 2018.

### **ALIENTO A LOS ABUSOS**

En 2016, un año antes de la creación de las FAES, durante un acto de juramentación de la II Promoción de efectivos del “Comando Antiterrorista” del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin), realizado el 25 de agosto en Barlovento, estado Miranda, Nicolás Maduro extendió una felicitación vía telefónica a los graduandos, en la que alentó abiertamente a la comisión de abusos y ejecuciones policiales por parte de los funcionarios del referido cuerpo policial. “A la violencia y el terrorismo se le debe golpear antes de que actúen [...] nuestra mayor victoria es un golpe preventivo, neutralizarlos, desconfigurarlos, desarmarlos, desarticularlos, abatirlos, antes de que actúen los terroristas [...]”.

Maduro afirmó entonces que las bandas delictivas en Venezuela están vinculadas y dirigidas por sectores de la oposición venezolana:

Vayan desde ya a obtener victorias [...] en Venezuela el terrorismo tiene nombre

*El decreto de “estado de emergencia” consolidó la “legalidad” alterna a la Constitución y la legislación vigente, que justifica la actuación de las FAES y otros componentes élite del aparato represivo estatal.*

y apellido, son estos grupos parásitos, vende patria de la derecha [...] que se han aliado con las bandas criminales de asesinos y secuestradores y poniéndole mucha plata y droga han puesto a estas bandas como instrumentos de la violencia, primero delincencial, pero también de la violencia terrorista.

Para julio de 2017 Maduro repitió ese argumento para justificar la creación y actuación de las FAES, y para septiembre de 2018, el inconstitucional decreto 3.610 que declaró el “estado de emergencia económica”, borró definitivamente la línea que separa los conceptos de defensa de la nación y seguridad ciudadana y propició el aumento de la letalidad del componente.

En el numeral 21 del artículo 2, el Decreto 3.610 estableció: “Diseñar y ejecutar planes especiales de seguridad pública que hagan frente a las acciones desestabilizadoras que atenten contra la paz de la Nación, la seguridad personal y el resguardo de las instalaciones y bienes públicos y privados”. Más adelante en el artículo 6° dice:

A fin de fortalecer el mantenimiento y preservación de la paz social y el orden público, las autoridades competentes deberán coordinar y ejecutar las medidas que se adopten para garantizar la soberanía y defensa nacional, con estricta sujeción a la garantía de los derechos humanos.

El decreto de “estado de emergencia” consolidó la “legalidad” alterna a la Constitución y la legislación vigente, que justifica la actuación de las FAES y otros componentes élite del aparato represivo estatal. Coincidiendo con la finalización del ciclo de protestas de 2017 y la imposición de la inconstitucional asamblea nacional constituyente, la declaratoria de “emergencia” generó un aumento en la frecuencia, intensidad y letalidad de los operativos de las FAES. Bajo la justificación de la lucha contra el “terrorismo”; el “paramilitarismo” y la “desestabilización” del país, la dictadura alentó la comisión de cientos de abusos por parte de los miembros del escuadrón.

#### **IMPUNIDAD CÓMPlice**

En Venezuela, junto a la pobreza, la impunidad es la mayor violación de derechos humanos. Provea ha afirmado numerosas veces que la impunidad en Venezuela es estructural. La propia fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, ha reconocido que la cifra de impunidad en materia de delitos comunes alcanza el 92 % de los casos y en violaciones de derechos humanos, se sitúa en 98 %. El irregular funcionamiento del sistema de administración de justicia, y el copamiento de la institucionalidad por parte del Poder Ejecutivo, garantizan impunidad para la mayoría de los delitos y violaciones de derechos humanos. De esta manera se generan condiciones favorables para la ocurrencia de abusos, los cuales no son sancionados. Esta situación afecta especialmente a los más pobres.

En noviembre de 2017, durante la denuncia contra Nicolás Maduro, Vladimir Padrino López, Néstor Reverol, Gustavo González López y Antonio Benavides Torres, ante la Corte Penal Internacional (CPI) por la presunta comisión de delitos de lesa humanidad, la fiscal general de la República afirmó que de acuerdo a la data levantada por el Ministerio Público venezolano, 8 mil 291 personas habrían sido asesinadas por agentes de la fuerza pública entre enero de 2015 y junio de 2017. La fiscal detalló que en 2015 habrían sido asesinadas 1.777 personas por funcionarios militares y policiales, en 2016 el número de asesinatos ascendió a 4 mil 667 personas, y hasta junio de 2017 unas 1.847 personas habrían sido asesinadas por agentes de la fuerza pública, según dijo la funcionaria en el marco de “un plan que persigue el Go-



UNES

*El significado histórico que ha tenido para la dictadura la pérdida total del apoyo popular, ha traído consigo el ascenso del terrorismo de Estado y los mecanismos de castigo contra los habitantes de las comunidades más pobres.*

bierno, de limpieza social”. De acuerdo a la data levantada por Provea en su Informe Anual 2017, unas 397 personas fueron víctimas de violaciones al derecho a la vida, lo que se suma a la cifra presentada por la fiscal general correspondiente a los meses enero-junio de 2017.

En julio de 2018 el Ministerio Público –bajo el control del fiscal constituyente, Tarek William Saab–, informó que 87 funcionarios de las Fuerzas de Acciones Especiales de la PNB estaban siendo investigados por su participación en presuntos hechos delictivos. No se informó detalladamente las causas seguidas contra estos funcionarios y no se aclaró si se trataba de investigaciones relacionadas con la comisión de delitos comunes o delitos contra los derechos humanos. Al día de hoy, se desconoce el resultado de estos procedimientos y no se tiene conocimiento de alguna otra investigación vinculada con las decenas de denuncias que se generan a diario debido a la actuación de este grupo élite de la PNB.

Toda la cadena de mando de las FAES debe ser investigada y sancionada por los numerosos abusos contra los derechos humanos cometidos por este escuadrón de la muerte. Ello incluye a Nicolás Maduro y los funcionarios de su gobierno de facto, involucrados con la dirección de la Policía Nacional Bolivariana. Néstor Reverol, quien detenta el control del Ministerio de Interiores, Justicia y Paz; el general de brigada (GNB) Alfredo Pérez Ampueda, director de la PNB; y el teniente coronel (GNB) Rafael Bastardo, figuran, junto a Maduro, como las cabezas en la estructura de mando de las FAES, y son ellos quienes deberán responder ante la justicia por las violaciones de derechos humanos cometidas por esta agrupación. Provea recuerda que a pesar de la existencia de un gobierno de facto en el país, ello no exime de responsabilidad a los funcionarios que en usurpación de funciones y en ejercicio del poder, cometan o alienten abusos contra los derechos humanos.

#### **FAES: BRAZO EJECUTOR DEL TERRORISMO DE ESTADO**

Como sustitutos de los impopulares “Operativos de Liberación del Pueblo” y su fracasada reedición “Operativos de Liberación Humanista del Pueblo”, los procedimientos de las FAES intentan contener –a fuerza de terror y abusos–, el descontento de un actor clave en la cam-

biante dinámica de la conflictividad en Venezuela: los más pobres.

Finalizado el ciclo de protestas de 2017, las comunidades populares del país y los trabajadores pasaron a ser protagonistas de la conflictividad social y de las demandas por derechos sociales. La agudización de la crisis social y económica y un escenario de emergencia humanitaria compleja, generaron la movilización de los más afectados por la crisis y la indolencia del poder. El Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS) registró la cifra récord de 12 mil 700 protestas durante 2018. La mayoría de estas manifestaciones se produjeron en demanda de derechos sociales y ante la precarización de los servicios públicos.

Desde que inició el reciente ciclo de protestas por el retorno a la democracia, las zonas populares han sido actores estelares en la conflictividad. Las protestas registradas en la populosa y emblemática comunidad de Cotiza, al norte de Caracas, irradiaron al resto de las zonas populares de la ciudad, que en la noche del 21 de enero iniciaron una revuelta contra el hambre, la precarización de los servicios públicos, y los reiterados abusos policiales que suceden a diario en los barrios. Antiguos bastiones del Partido Socialista Unido de Venezuela y del proyecto político bolivariano, se han convertido en el epicentro de la nueva rebelión. La respuesta de la dictadura ha sido particularmente violenta contra quienes protagonizan las protestas de 2019. El significado histórico que ha tenido para la dictadura la pérdida total del apoyo popular, ha traído consigo el ascenso del terrorismo de Estado y los mecanismos de castigo contra los habitantes de las comunidades más pobres.

\*Organización no gubernamental, independiente, venezolana, dedicada a analizar la situación de los derechos humanos en Venezuela, y a la promoción y defensa de los mismos.